

Medellín, cuatro (4) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso	DECLARATIVO VERBAL RCE
Radicado	05001 31 03 018 2022 00225 01
Demandante	NICOLÁS JAFFET GÓMEZ GUTIÉRREZ Y OTROS
Demandada	JAIRO ALONSO SERNA Y OTROS
Juzgado origen	DIECIOCHO CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación interpuesta frente al auto del 14 de agosto de 2023, que negó la ratificación de unas pruebas documentales.

1. ANTECEDENTES.

Mediante auto del 14 de agosto de 2023, el juzgado de origen señaló fecha para llevar cabo las audiencias previstas en los artículos 372 y 373 del CGP y decretó pruebas, particularmente, resolvió negar la ratificación de documentos de caja menor por concepto de cuidados personales, solicitada por la llamada en garantía HDI SEGUROS S.A., porque no se determinó quién es la persona que debe concurrir al estrado para tal efecto¹.

El apoderado de la solicitante de la prueba interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión².

2. DEL RECURSO.

Indicó el recurrente que para la ratificación de los documentos contenida en el artículo 262 del CGP, no se establece como requisito que el solicitante deba indicar el nombre de la persona que debe concurrir al estrado; que la ratificación solicitada cumple los requisitos intrínsecos del artículo 168 del CGP (conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de ilicitud) y los extrínsecos de toda prueba (oportunidad procesal, formalidades, legitimación del proponente, competencia del funcionario y capacidad del órgano de prueba); que el referido precepto 168 establece las causales de rechazo de las pruebas, pero la providencia recurrida no se fundamentó en ninguna de ellas, por lo que carece de motivación, además, bastaba con examinar los anexos de la demanda para identificar a la persona llamada a la ratificación y; que la carga de hacer comparecer al llamado a ratificar es de quien aportó el documento, por lo que no se le podía asignar a la contraparte el suministro de la identidad.

¹ Ver ruta carpeta 01PrimeraInstancia / C01CuadernoPrinicipal / 41.DecretaPruebasFijaFechaAudiencia.

² Ibid. archivo 42.Rec.RepubsusidApelacSolicAdicion.

"Al servicio de la justicia y de la paz social"

Mediante auto del 5 de diciembre de 2023, el Juzgado mantuvo su decisión, considerando que, si bien el artículo 262 del CGP no establece requisitos para la solicitud de ratificación, el artículo 12 del Código consagra la procedencia de la analogía en caso de vacíos procedimentales, por lo que se aplica lo previsto en los artículos 185 y 212 del mismo estatuto, conforme a los cuales, para la declaración sobre documentos es al interesado a quien le corresponde pedir que se cite al autor y para el efecto se debe proceder como se hace para pedir el testimonio, esto es, suministrando nombre, domicilio, residencia o lugar donde puede ser citado y enunciar concretamente el objeto de la prueba. En consecuencia, consideró que el interesado en la prueba debe cumplir con tal carga, que no puede suplir el juez y, por tanto, no resulta procedente la ratificación³ y, concedió la apelación en el efecto devolutivo, remitiendo el asunto a esta judicatura.

3. CONSIDERACIONES.

3.1 COMPETENCIA.

Por disposición del artículo 321 del CGP, el recurso de apelación contra los autos procede contra los allí determinados, o precisados en normas especiales, listado taxativo dentro del que se encuentra el proveído atacado en el numeral 3.

Para resolver, dispone el artículo 328 de la misma obra que, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, el superior debe limitar su análisis a las razones de inconformidad expuestas por el recurrente.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde determinar si por no haberse identificado la persona que debía ratificar los documentos, había lugar a negar la práctica de la ratificación documental solicitada.

3.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Carga de la prueba, examen de admisibilidad y ratificación documental (normatividad)

En atención a la naturaleza dispositiva del proceso civil, el artículo 167 del CGP consagra la regla del juicio⁴, conforme a la cual, compete

³ Ibid. archivo 43. *ResuelveRecursoReposición*.

⁴ Micheli, Gian Antonio; La carga de la prueba; editorial Olejnik, Argentina 2019, páginas 183 a 252.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

a las partes acreditar los supuestos de hechos de las posturas jurídicas que sostienen en el litigio, so pena de la desestimación de sus pretensiones o excepciones, según corresponda. Esta es la regla:

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”

En línea con tal exigencia, el artículo 168 del CGP prevé las cualidades que deben revestir las pruebas pedidas en el proceso, so pena de rechazo y, que, por tanto, constituyen los aspectos en los que debe detenerse el estudio del juzgador al momento de realizar el examen de admisibilidad probatoria:

“ARTÍCULO 168. RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”

Adicionalmente, cada medio de convicción requiere de particulares calidades que lo doten de idoneidad demostrativa. Con relación a la prueba documental, además del carácter, autenticidad, idioma, integridad, naturaleza, entre otras, el artículo 262 establece la regla para la aportación de los documentos privados emanados de terceros:

“ARTÍCULO 262. DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.”

Analizada en conjunto la normatividad referida, se puede afirmar que, para la prosperidad de lo pretendido en el proceso, las partes tienen la tarea de acreditar fácticamente sus planteamientos procesales y para ello tienen el deber de suministrar los medios de convicción permitidos por el ordenamiento, relacionados con el asunto, con capacidad demostrativa y relevantes para lo que es objeto de controversia y, cuando las pruebas que se aducen son documentales, declarativas y proceden de personas ajenas al litigio, existe la posibilidad de que no baste con su aportación, sino que, para dotarlas de veracidad, eventualmente se requiera presentar a su autor para que convalide su contenido, contingencia que tiene ocasión cuando, al momento del traslado la contraparte así lo solicita.

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

En consecuencia, la ratificación no es propiamente una prueba distinta o autónoma respecto de la documental a la que se refiere, sino una exigencia adicional que deriva del derecho a la contradicción de la pedida y, por tanto, se constituye más bien en una talanquera, en un requisito eventual para conseguir la eficacia demostrativa de esa prueba documental, de tal forma que, concluir que la solicitud de la ratificación constituye a la contraparte en la solicitante de la prueba documental controvertida y que por ello le compete identificar, citar y hacer comparecer a quien debe ratificar constituye un contrasentido.

3.4 CASO EN CONCRETO.

Las reglas concernientes a la aportación, decreto, práctica y valoración de pruebas se encuentran consolidadas en el Código General del Proceso, concretamente, el juicio de admisibilidad probatoria exige del funcionario judicial un control de utilidad, pertinencia, necesidad y legalidad reunido en el artículo 168 del CGP, norma que regula las causales por las cuales debe motivarse el rechazo de una prueba, esto es, la ilícita, impertinente, inconducente, la manifiestamente superflua o inútil, de manera que, existiendo norma que regula la admisión probatoria resulta ineludible motivar el rechazo probatorio con fundamento en tales presupuestos legales, así como en los que de manera especial se establece para cada medio de prueba.

Tratándose de ratificación de documentos, el artículo 262 señala que respecto de los documentos aportados como prueba al proceso, es posible solicitar la ratificación de aquellos declarativos emanados de terceros, siempre y cuando la contraparte lo haya solicitado, así, la eficacia probatoria de los documentos de tal naturaleza puede ser limitada por falta de ratificación cuando la contraparte lo ha requerido.

En el asunto bajo examen, sostiene la recurrente que la negativa al decreto de la ratificación no tiene fundamento, toda vez que quien tiene la obligación de suministrar los datos de identificación de la persona que debe ratificar los documentos es la demandante por haber sido quien aportó los documentos y que la identificación de la persona que debe comparecer se puede constatar en la firma de los mismos.

De los fundamentos jurídicos expuestos se infiere que la parte que solicitó la prueba documental y está interesada en sustentar sus planteamientos de hecho es la demandante, ella fue quien los aportó

“Al servicio de la justicia y de la paz social”

en procura de lo pretendido, luego es ella quien debe asumir la labor de suministrar los datos para la comparecencia de quien debe ratificar, la demandante se limitó a ejercer su derecho a la contradicción reclamando la validación del contenido.

La decisión de negar la ratificación no tiene justificación, el juicio de admisibilidad debió efectuarse con apego a los criterios del artículo 168 y las exigencias especiales del artículo 262, conforme a las cuales el juzgador tenía que analizar la utilidad, pertinencia, conducencia y necesidad de tal prueba y, a lo sumo, que la solicitud corresponda a documentos declarativos emanados de terceros y a la oportunidad de la solicitud de ratificación.

La motivación del *a quo* desconoce que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial (artículo 11 CGP y 228 Constitución), en este caso no hay vacío que amerite la analogía y son los propios preceptos referidos los que analizados en conjunto permiten inferir que la ratificación es consecuencia el derecho a la contradicción, luego es la parte solicitante de la prueba documental quien debe asumir la gestión y suministrar los datos para que, mediante la intermediación del juez, sea corroborado el contenido de los documentos dubitados.

En suma, se revocará el auto recurrido en lo particular y en su lugar el juez de instancia debe disponer lo pertinente, esto es, resolver sobre el decreto de la prueba teniendo en cuenta lo expuesto, sin volver a acudir a las razones que dieron lugar al presente recurso.

No se impondrán costas por no haberse causado las mismas.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Unitaria de Decisión Civil,

4. RESUELVE.

PRIMERO: REVOCAR el auto del 14 de agosto de 2023, en cuanto a la negativa de la prueba de ratificación solicitada por el llamado en garantía HDI SEGUROS S.A, por lo expuesto.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al juzgado de origen para que disponga lo pertinente según lo dispone el artículo 329 del mismo estatuto, esto es, proceda a resolver sobre el decreto de la referida prueba, teniendo en cuenta lo expuesto y sin volver a acudir a la razón que dio lugar al presente recurso.

TERCERO: No condenar en costas.

NOTIFIQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado